

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por el Sr. D. José Ros y Prats, contra la jefatura de hacienda del mismo Estado por violacion de garantías constitucionales.*

### PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El ciudadano administrador principal de la renta del papel sellado, antes de emitir su opinion sobre el negocio que origina este expediente cree de su deber manifestar á ese juzgado, que, siendo ignorante en materia de derecho, etc., solamente por cumplir con su deber que como empleado de hacienda se le impone, se atreve á dictaminar sobre negocios enteramente extraños, con el temor natural de que su humilde opinion sea errónea ó infundada las bases en que él crea fundadas; pero la mas clara inteligencia de vd. y sus profundos conocimientos resolverán si ella debe ser apreciada ó desechada.

En esta inteligencia el que suscribe dice: que se ha impuesto con detenimiento del expediente promovido por D. José Ros y Prats, solicitando amparo contra el embargo y procedimientos practicados por orden de la jefatura de hacienda de este Estado, en su casa de habitación y comercio situado en el Distrito de Yautepec, conocida por casa de «Huerta» y en dicho expediente ha encontrado: que la jefatura de hacienda con aprobacion del ministerio respectivo, segun copia certificada que acompaña en union de su informe relativo, cobra al Sr. Ros y Prats, conforme á la liquidacion que le formó la cantidad de mil ochenta y cuatro pesos sesenta y nueve centavos, como deuda de una tercera parte de tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos siete centavos, del total valor de la finca expresada y por haberla rematado en el año de 1870 la misma

jefatura al C. Rafael Vidal en las dos terceras partes del valor antedicho segun la escritura de venta que obra al principio de este expediente; que el administrador de rentas de Yautepec por orden de la jefatura de hacienda embargó al Sr. Ros y Prats la expresada casa y resistiéndose dicho señor á entregar las llaves, mandó el ciudadano administrador desalojarlo de ella por medio de los agentes de policía, segun la informacion que rinde del juzgado de letras de Yautepec, pedida por el quejoso en su escrito de 4 de Julio último y el informe del mismo ciudadano administrador de Yautepec: que, segun la copia certificada por el ciudadano secretario, de ese juzgado de 27 de Julio de 1873, la Justicia de la Union amparó á D. José Ros y Prats en ese mismo año contra los acuerdos del Ejecutivo federal de 4 de Mayo y 28 de Enero de propio año.

Parece al que suscribe que en virtud de ese amparo; por lo menos es litigioso si debe cobrarse el exceso contra el cual se pide el actual amparo; como tambien por la escritura de venta otorgada en favor del C. Vidal, por creer tambien litigioso si, aun en caso de deberse la tercera parte á que se refiere la liquidacion de la jefatura es de cobrarse al quejoso ó al jefe de hacienda que hizo el remate en 1870 como responsable de este procedimiento.

El art. 14 de la Constitucion federal de 1857 en su frac. 2ª dice:

«Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley.»

El art. 16 en su parte primera dice:

«Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.»

El art. 17 en sus fracciones 2ª y 3ª dice:

«Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán siempre espeditos para administrar justicia.»

En consecuencia no parece que la oficina ejecutora sea la autoridad competente para declarar que es cobrable la cantidad en cuestion; y por lo mismo aunque la ley de 20 de Enero de 1837 sea aplicable al caso presente, cree el que suscribe que aun no era tiempo de que dicha oficina violentara sus procedimientos llevando á su término el embargo á que se refiere la queja, sino antes haber pasado dichos procedimientos al juez competente, conforme á la misma ley, para que este declarara si eran ó no de cobrarse los mil ochenta y cuatro pesos sesenta y nueve centavos y si por consiguiente debía ó no llevarse á su término el cobro ó embargo.

Por tales razones y de conformidad con los artículos citados; el que suscribe cree que en la actualidad es de ampararse á D. José Ros y Prats contra los procedimientos ejecutados por el ciudadano administrador de rentas de Yautepec y por órden de la jefatura de hacienda en la casa de dicho señor, conocida anteriormente por de "Huerta," y hoy, por el "Bazar de José Ros y Prats;" restituyéndole la posesion de la expresada casa, hasta tanto la jefatura expresada no sujete sus procedimientos á la forma debida.

Cuernavaca, Setiembre 5 de 1874.—*Ricardo Argandar.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico.—Cuautla Morelos, Setiembre 25 de 1874.—*Emilio Orda.*

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Cuautla Morelos, Setiembre 22 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por el Sr. D. José Ros y Prats, contra el embargo practicado por órden de la jefatura de hacienda en este Estado en una casa que di-

se ser de su propiedad llamada de "Huerta" ubicada en Yautepec, y los procedimientos con que este se ha verificado, con cuyos hechos cree el promovente violada en su persona la garantía que otorga el art. 16 de la Constitucion vigente: visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, el parecer fiscal y cuento ver convino y

Considerando: Primero: que segun aparece de autos, los hechos que han motivado la promocion del recurso son los siguientes: La jefatura de hacienda adjudicó á D. Rafael Vidal la finca en cuestion en 3 de Setiembre de 1870 por las dos terceras partes de su precio, y en 8 de Noviembre del mismo año, se otorgó la escritura respectiva en la cual se renunció por parte de la jefatura el beneficio de la ley 2ª tít. 1º lib. 10 de la Novísima Recopilacion y el término que señala para pedir la revision ó suplemento á su legítimo precio. En 28 de Diciembre de 1871 el rematante subrogó en todo, sus derechos al Sr. D. José Ros y Prats. Posteriormente el ciudadano Presidente de la República por acuerdos de 4 de Mayo de 72 y 28 de Enero de 73, declaró nulo el remate; mas contra estas determinaciones solicitó y obtuvo el dueño de la finca, el amparo de la Justicia de la Union, quedando por lo mismo en su situacion legal respecto de la casa en el mismo estado en que se encontraba antes de haberse dictado los referidos acuerdos. En 3 de Junio del corriente, ordenó la jefatura al ciudadano administrador de rentas de Yautepec, que procediera efectivamente al cobro de la tercera parte del valor de la casa, que segun afirma, se dedujo indebidamente de su valor total al tiempo de rematarse á favor del Sr. D. Rafael Vidal, y que importa la cantidad de... \$1,084 69 cs. A consecuencia de esta órden se embargó la casa, y al hacerlo, el administrador de rentas alegando que no estaba ocupada por el Sr. Ros y Prats, y que este señor se resistía á que se practicara el avalúo y demas operaciones que debian preceder al remate, lo obligó por la fuerza, á

salir de ella con su familia, recogió las llaves y las puso en poder de un depositario. Acerca de los referidos hechos, no ha sido necesario rendir prueba, porque ambas partes convienen sustancialmente en ellos según consta de este expediente.

Segundo; Que para demostrar el quejoso la procedencia del recurso intentado, expone en resumen: 1º que según la ley de 20 de Enero de 1827, la facultad coactiva se halla limitada por todos aquellos casos que fueren contenciosos y que corresponden al conocimiento de los jueces. 2º que entre estos se halla comprendido el que ha dado caso al cobro, *pues hay motivo fundado de dudar sobre la aplicación de la ley* en que se funde la orden de la jefatura. 3º que siendo esto así, es incompetente el ciudadano jefe de hacienda para proceder contra él, y por lo mismo se ha vulnerado en su persona la garantía que otorga el art. 16 de la Constitución que dispone que nadie puede ser molestado sino en virtud de orden escrita de la autoridad competente. Que aun suponiendo que fuera competente la jefatura de hacienda, la orden carece de fundamento legal, porque la ley de 10 de Diciembre de 1869 que se alega, no es aplicable, y por lo mismo se ha infringido también el citado artículo que exige la expresión del fundamento legal. Que respecto a los procedimientos con que el embargo se ha practicado, ninguna autoridad puede ser competente, porque han sido abusivos y encierran una notoria infracción de las leyes que fijan el procedimiento en casos semejantes.

Tercero: Que examinando los motivos que se alegan como fundamento para hacer dudoso el crédito, aparece desde luego que no es del todo indudable la exacta aplicación de la ley de 10 de Diciembre de 1869, pero aun en el supuesto contrario, la circunstancia de que el presunto deudor pudo excepcionarse apoyado en una cláusula de la escritura misma de adjudicación, en virtud de la cual se renunció al beneficio de pedir

el suplemento del precio, hace evidentemente litigioso el adeudo, y exige que antes de procederse ejecutivamente á su cobro, se dilucide en juicio contradictorio la fuerza y valor legal de la excepción, lo cual entra única y exclusivamente en la esfera de la competencia de la autoridad judicial.

Cuarto: Que á esto en nada obsta el carácter privilegiado del acreedor, que siempre y por consideraciones de interés público, ha gozado de la facultad coactiva para la realización de sus créditos, así como de otras prerrogativas consignadas en nuestra legislación fiscal; porque semejantes privilegios por el simple hecho de serlo, deben limitarse á los casos para que expresamente se han concedido, y en los que una evidente necesidad los justifica, y en el presente caso no tiene lugar esta circunstancia porque el art. 2º de la ley de 20 de Enero de 1827, que concede el uso de la facultad coactiva, no solamente con su silencio sino expresamente la niega en todos aquellos casos en que sean forzosa, las actuaciones judiciales como *..... en las que se dispute la paga ó adeudo de una cantidad que por su origen..... ofrezca motivos de dudar sobre la aplicación de la ley.*

Ahora bien el origen del derecho que alega tener el ciudadano jefe de hacienda en un contrato de enagenaciones hecho á favor de la causa habiente del Sr. Ros y Prats, la excepción que este último aduce en su favor se apoya en una de las cláusulas del contrato mismo; por consiguiente, por razón de su origen es contencioso el adeudo.

Quinto: Que las razones de pública conveniencia que hay para conceder el fisco la facultad de apremiar á sus deudores y realizar ejecutivamente el pago, no tiene lugar en el presente caso, y para convencerse de ello basta examinar el diverso origen de los derechos fiscales. El pago de los impuestos como indispensables para la subsistencia de la administración no puede demorarse con las dilaciones de un juicio en

que se discutiera la obligacion en que está todo hombre para contribuir á los gastos públicos, pues que esta obligacion no es dudosa *por razon de su origen, aunque sí por la cuota, variacion de tiempo ó de circunstancias*; pueden presentarse alguna vez motivos de duda que exigirían una previa dilucidacion en juicio (art. 2º ley de 20 de Enero de 1837.) Lo contrario debe decirse de los créditos que reconozcan diverso origen que no simplemente la ley, como por ejemplo un contrato. Los derechos que de estos se derivan pueden ser ó son con frecuencia discutibles.

Así tambien es eventual su procedencia y eficacia y el erario nacional no puede contar con ellos de una manera exacta y determinada para que pudieran servir de base á la satisfaccion de los gastos públicos.

Sexto. Que por lo mismo es incompetente el ciudadano jefe de hacienda para ordenar el cobro usando de la facultad coactiva, lo cual en manera alguna significa que á juicio del suscrito juez sea ó no procedente en derecho la excepcion que alega el Sr. Ros y Prats.

Sétimo. Que respecto á los procedimientos con que el embargo se ha verificado, es indudable que ha habido notable exceso en la molestia que legítimamente puede inferirse en casos semejantes, y que por ellos se ha infringido el art. 16 de la Constitucion.

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 16, 101 y 102 de la carta fundamental de 1857, declaro:

Primero. Que la Justicia de la Union ampara y protege al Sr. D. José Ros y Prats, contra el embargo practicado en la casa llamada de "Eluerta" situada en Yautepec, y los procedimientos con que este se ha verificado.

Segundo. Hágase saber y publíquese por los periódicos.

Tercero. Elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

TOMO VII.—PARTE II.

- Así lo decretó y firmó el ciudadano juez interino de Distrito, Emilio Ordaz, actuando con testigos de asistencia y por falta de secretario; damos fé.—*Emilio Ordaz.*—Una rúbrica.—A.—*J. E. Lozano.*—Una rúbrica.—A.—*Carlos Arturo.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Cuautla Morelos, Setiembre 25 de 1874. —*Emilio Ordaz.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 21 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Morelos por D. José Ros y Prats, contra los procedimientos de la jefatura de hacienda del Estado, que haciendo uso de la facultad económico coactiva le embargó una finca que dice ser de su propiedad, ubicada en Yautepec, con cuyo hecho crees el promovente violada la garantía consignada en el art. 16 de la Constitucion federal.

Visto el informe de la autoridad responsable, el parecer fiscal, la sentencia del Juez de Distrito; y

Considerando: Que proviniendo el cobro que la hacienda pública hace á Ros y Prats de un punto dudoso, por prestarse á diversas apreciaciones la facultad que tuvo la jefatura de hacienda de Morelos para renunciar á los derechos del fisco sobre el suplemento del precio en la escritura otorgada en Noviembre de 1870; que la resolucion definitiva de esta duda es de la competencia de los tribunales comunes; que la jefatura de hacienda no ha tenido mas derecho que el de embargar la finca por la resistencia del dueño al pago de la cantidad que en opinion de la jefatura se debe al fisco, siendo toda providencia ulterior al embargo, del resorte de los tribunales ordinarios, hasta la final resolucion del punto litigioso.

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se declara:

Que es de reformarse y se reforma la sentencia del Juez de Distrito, en los términos siguientes:

"L. Justicia de la Union ampara y protege al Sr. D. José Ros y Prats, contra los procedimientos de la jefatura de hacienda de Morclos, posteriores al embargo."

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Ignacio M. Altamirano.—Simón Guzmán.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico.—México, Enero 18 de 1875.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

## AMPARO.

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por José Alejandro García, contra los procedimientos del Lic. Catalá, que, en calidad de Juez sustituto de primera instancia de Minatitlán, lo ha juzgado y sentenciado á diez años de presidio con retención, por el delito de homicidio.*

### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que D. José Alejandro García, vecino de Minatitlán, soli-

cita amparo y proteccion de la justicia federal contra el procedimiento criminal que le ha formado el ciudadano juez de primera instancia de aquel Canton, por el delito de asesinato de la jóven María Francisca Carreon, fundándose en que dicho funcionario desempeña el juzgado como sustituto, por ser juez primero de Paz de aquella villa, cuya eleccion popular fué nula por no haber tenido el año de vecindad que exige la ley electoral en su art. 78, y por lo tanto no lo considera competente para conocer de su causa.

Pedido el informe correspondiente á la respectiva autoridad ejecutora del acto reclamado, manifiesta, aunque sin fundamento, que no procede este juicio, por versarse la reclamacion sobre asunto judicial, conforme á lo dispuesto en el art. 8º de la ley orgánica y de procedimientos, siendo así que su artículo primero que es copia fiel del 101 de la Constitución federal, está en abierta oposicion con aquel, y por lo mismo es práctica constante de los tribunales federales, admitir el recurso contra todo acto judicial, y alega tambien que conforme á la Constitución del Estado, que es superior á la ley electoral, tiene los requisitos necesarios para la validez de su eleccion; sobre lo cual debe observarse, que la expresada Constitución cuando trata de los requisitos que deben reunir los votados para cualquier cargo público de eleccion popular, dispone que se esté á lo prevenido en la ley electoral.

El suscrito promotor con vista de lo actuado y con presencia de lo determinado expresamente en el art. 99 de dicha ley, considera de la exclusiva facultad de la H. Legislatura del Estado, hacer la declaracion de la nulidad de las elecciones de los funcionarios públicos, entre los que se encuentra el juez primero de Paz de Minatitlán, que está desempeñando el juzgado de primera instancia, cuya atribucion legislativa no tiene término fijado para su ejercicio; así es que todas las autoridades, funcionarios y empleados de la República, tienen el deber de